

Cómo las prioridades del gobierno no coinciden con la de los parados

Frente al estancamiento: ¡ajuste!

Joaquín Artola *

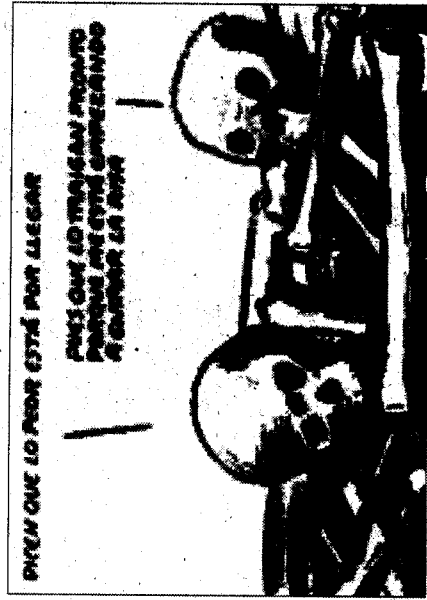
En lo que va de año, la ocupación ha aumentado en 152.600 personas. Lo malo es que a este ritmo de creación de empleo, se necesitarían quince años para encontrar un empleo a los cuatro millones y medio de parados (eso, suponiendo que el pleno empleo fuera posible bajo el capitalismo, que no lo es, como Marx, Friedman y el Tratado de Lisboa reconocieron cada uno en su momento).

La economía española ha tocado fondo en esta crisis (o en esta fase de la crisis, cosa que está por ver). Pero tocar fondo no quiere decir que empiece a remontar el vuelo, sino que se encuentra instalada en el fondo del barranco. El consumo privado está bajo mínimos: el gasto medio por hogar en 2009, 30.411 euros, representó una bajada de 4,8 puntos respecto del año anterior. En términos constantes esta tasa fue del -5,1%. El comercio minorista se resiente de ello: en septiembre disminuyó un 0,4%, y respecto a septiembre del año anterior la caída es del -2,9%. En este contexto, el ligero incremento en la producción industrial (vinculado sobre todo a reposición de inventarios) es aprovechado por los industriales para intentar recomponer sus ganancias por medio de

un aumento de precios (3,4% en variación interanual septiembre-septiembre), y lo mismo intentan los vendedores finales, de modo que el IPC aumenta a una tasa anual del 2,2% (octubre a octubre), inferior a la de los precios industriales (lo habitual es lo contrario) porque el consumo no levanta cabeza.

¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando el consumo privado está cayendo, y su principal objetivo es crear empleo? Depende de la velocidad a la que quiere crear empleo: si se trata de sacar al mayor número de gente posible del desempleo lo más rápido que pueda, lo que hay que hacer es comerse esa calda con consumo público, y aumentar este tanto como sea necesario para crear el volumen de empleo requerido. En 2009, el gasto público solo permitió compensar el 40% de la caída del consumo privado. En consecuencia, el consumo se redujo en 15.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente la destrucción directa de 400 mil empleos y al menos la mitad de esa cifra en empleos indirectos -entre el primer trimestre de 2009 y el primero de este año se perdieron unos 700 mil puestos de trabajo.

Estas cifras no son muy complicadas de entender ni de calcular. Lo que significan en definitiva es que si el gobierno quiere reducir el paro



369.000 millones de euros de deuda externa de corto plazo de los bancos y en general, renegociar el billón y medio de euros de deuda externa privada (1,5 veces el PIB de España).

Porque la deuda pública española (externa e interna) está lejos de ser "excesiva" incluso para los estrechos márgenes del pacto de estabilidad del euro: actualmente se sitúa en un 53% del PIB, y se estima que puede llegar al 63% del PIB en 2010, cuando en Alemania, era del 73% en 2009 y subirá al 75% en 2010, en Gran Bretaña del 68% al 76%, o en Francia del 78% al 83% en 2010.

Por lo tanto, un gobierno cuya primera preocupación fuera el paro y el estancamiento económico, incrementaría el gasto, y si fuera necesario, lo financiaría a corto plazo con deuda, ya que no puede hacer como Estados Unidos (fabricar billetes) ni aumentar la recaudación fiscal en un contexto de debilidad de la acumulación como el actual. Y frente a los banqueros

internacionales ("los mercados") si tuviera el coraje político suficiente, exigiría que adquiriesen más deuda o amenazaría con un default de la deuda exterior (como hizo por ejemplo Raúl Alfonsín hace 25 años en Argentina -lo es que un gobierno argentino de derechas tiene mayor margen de maniobra política frente a "los mercados" que un gobierno español de "izquierdas"?) y también exigiría de los financieros españoles y de las grandes fortunas un mayor compromiso con la deuda a cambio del enorme apoyo en la gestión de las debilitadas finanzas de los primeros y a la escasa tributación de las segundas.

En fin, que si no se hace, es por lo que no se quiere hacer. Que en las decisiones de un gobierno socialista pesen más los intereses financieros que los de la economía productiva, y los beneficios de los banqueros más que los ingresos de los trabajadores, no es ninguna novedad. Pero es también parte de la explicación de la pérdida de rumbo de la democracia en Europa, y del auge del populismo (este sí es de verdad) de extrema derecha en el continente. Este es el contexto de los presupuestos generales del estado de 2010 y ahora, de los de 2011.

* Profesor Economía EHU/Universidad del País Vasco